

CAPÍTULO V

LAS PARTES DE LA RELACIÓN PROCESAL

I. EL CONCEPTO DE PARTE

Múltiples son las definiciones y aportaciones doctrinales encaminadas a determinar quiénes son los sujetos de la relación jurídico-procesal, esto es, los que actúan como sujetos activos y pasivos, o que, frente a los anteriores, tienen la calidad de terceros.

La tendencia procesal mayoritaria reitera que la cualidad de parte se adquiere, en principio, sin referencia al derecho sustancial, por el solo hecho de proponer la demanda ante el juez²⁴⁸.

En esta materia, gran difusión ha tenido el concepto de Chiovenda, para quien "es parte el que demanda en nombre propio (o en cuyo nombre es demandada) una actuación de la ley, y aquel frente al cual ésta es demandada"²⁴⁹.

²⁴⁸ Coinciden en esta idea, entre otros, ROSENBERG, Leo, *Tratado de Derecho Procesal Civil*, tr. de la 5ª ed. alemana: Ángela Romera, Buenos Aires: E.J.E.A., 1955, T. I, p. 211; SCHONKE, Adolfo, *Derecho Procesal Civil*, tr. Leonardo Prieto-Castro, Barcelona: Bosch, 1950, p. 85; GOLDSCHMIDT, James, *Derecho Procesal Civil*, tr. L. Prieto-Castro, Buenos Aires: Labor, 1936, p. 191; PICARDI, Nicola, *Manuale del Processo Civile*, ob. cit. pp. 125-126; GRIFF, Jamie, "Consideraciones acerca del concepto de parte y pluralidad de parte", en *Estudios de Derecho en Homenaje a Raúl Tavolari Oliveros*, (VV.AA.), Santiago: LexisNexis, 2007, p. 127; PROTO PISANI, Andrea, *Lezioni di Diritto Processuale Civile*, Napoles: Jovene, 2006, pp. 304-305; RODRÍGUEZ GARCÉS, Sergio, *Tratado de las tercerías*, Santiago: Ediciones Vitacura, 1987, T. I, p. 17.

²⁴⁹ CHIOVENDA, José, *Principios de Derecho Procesal Civil*, tr. de la 3ª ed. italiana José Casais y Santaló, Madrid: Reus, 1922, t. II, p. 6. Este concepto goza de gran aceptación en doctrina, lo siguen, entre otros, MORTERO AROCA, Juan, "Las partes en el proceso del trabajo:

Como lo explica Calamandrei, se llama partes a los contendientes en el proceso, en el mismo sentido en que se habla de partes en todos los casos en que hay una contraposición de adversarios que compiten entre sí para la obtención de una victoria: en un duelo, en un torneo cabalístico, en una competición gimnástica, en una lucha política de partidos o facciones.²⁵⁰

Llenando el vacío de nuestro Código de Procedimiento Civil, la Corte Suprema ha señalado que "el concepto de parte (...) corresponde a la única o a cada una de las distintas personas que entablan la demanda o gestión judicial o que tienen el carácter de demandados; y por consiguiente, partes son los sujetos de la relación jurídica procesal que se va a desenvolver en el pleito, o dicho en otros términos, los que son sujetos activos o pasivos de la demanda".²⁵¹

Si bien en su sentido natural este concepto se refiere al demandante y al demandado, dichas denominaciones pueden cambiar. Así, en el proceso de ejecución, se designan como ejecutante y ejecutado; en materia de medios de impugnación se distingue entre recurrente y recurrido, entre apelante y apelado; si el que ingresa a una relación procesal en curso es un tercero, recibirá el calificativo de tercero coadyuvante, tercero excluyente, tercerista, etc.

2. LA RELEVANCIA JURÍDICA DE LA CALIDAD DE PARTE

La calidad de parte en la relación procesal permite ejercer los derechos y cumplir con las cargas u obligaciones inherentes a ella.

²⁵⁰ Cfr. Calamandrei, "en Estudios de derecho procesal", Barcelona: Bosch, 1981, p. 350; Guarnieru, José, *Las Partes en el Proceso Penal*, tr. Constanancio Bernardo de Quiros, México: (Puebla) José M. Cayula, 1952, pp. 41-42; ORTELLS RAMOS, Manuel, *Derecho Procesal Civil*, Pamplona: Thomson Reuters, 10ª ed., 2010, p. 102.

²⁵¹ Cfr. Calamandrei, Piero, *Instituciones de Derecho Procesal Civil, según el nuevo Código de 1940*, vol. II, p. 293.

²⁵² CS, 16 de octubre de 1941, RDJ, t. XXXIX, sec. 1ª, p. 276. En nuestra doctrina, sobre el tema, MAURICIO BARRERA SIEGEL, Joseph, *Concepto de parte y capacidad procesal*, Memoria de Prueba, Universidad de Chile: Editorial Universitaria, 1960.

Asimismo, esta condición jurídica determina el funcionamiento de una serie de instituciones procesales, tales como, el contenido del derecho de defensa (que depende de quién sea la contraparte); la excepción de cosa juzgada o de litispendencia, el pago de las costas, la legitimación para impugnar las resoluciones, el derecho a obtener la inhabilitación por falta de imparcialidad de jueces, testigos y peritos, entre tantas otras cuestiones.

En suma, constituye una máxima del proceso civil que los actos de alegación, prueba e impugnación deben ser ejecutados por las partes.

3. EL PRINCIPIO DE DUALIDAD DE PARTE

El proceso civil contencioso presupone la existencia de dos partes.²⁵² Esto significa que la relación jurídica procesal se desarrollará entre dos partes, aunque cada una de ellas, o ambas, pueda estar constituida de una o muchas personas, tal como ocurre en las distintas manifestaciones del litisconsorcio.

La dualidad de partes es una proyección del principio de bilateralidad, audiencia o contradicción, en virtud del cual nadie puede ser condenado sin darle la posibilidad de ser oído en el juicio.²⁵³

²⁵² La pluralidad de partes no es una materia pacífica en la doctrina. Sobre el principio de dualidad de partes, entre otros, cfr. PRIETO-CASTRO, Leonardo, *Tratado de Derecho Procesal Civil*, Pamplona: Aranzadi, 2ª ed. 1985, t. I, pp. 233-236; MONTERO AROCA, Juan, *La Intervención Adhesiva Simple, Contribución al Estudio de la Pluralidad de Partes en el Proceso Civil*, Barcelona: Hispano Europea, 1972, p. 5; QUINTERO DE PRIETO, Beatriz, "Proceso con Partes Plurales", en *Revista de Estudios Procesales*, N° 33, (1980), Rosario, Argentina, pp. 67 y ss. En la doctrina procesal italiana el gran defensor de la pluralidad de partes ha sido REDENTI, fundamentalmente en sus trabajos "Pluralità di parti nel processo civile (Diritto romano)", en *Archivio Giuridico*, 1909, vol. 79, 1-3; *Il giudizio civile con pluralità di parti*, (Milano, 1960), (la primera edición es de 1911 y la de 1960 es una reimpresión); *Profili Pratici del Diritto Processuale Civile*, 2ª ed. Milán, 1939, pp. 247 ss., 179 ss., 237 ss. y 251 ss.

²⁵³ La dualidad de partes constituye un elemento distintivo de la jurisdicción contenciosa, que la diferencia de la jurisdicción voluntaria. Tal como se explicó, en esta última se acude al juez como un sujeto dotado de autoridad y potestad jurídica, para documentar la existencia de hechos, crear, modificar o extinguir derechos en una variada serie de estados y situaciones jurídicas. En la jurisdicción voluntaria existe un solicitante que requiere la intervención del órgano jurisdiccional en aquellos casos que la ley lo establece.

Esta exigencia se explica porque no hay derechos que existan impersonalmente; todos existen referidos a un sujeto y, para ejercitarse—incluso en el proceso—, se deben hacer valer frente a alguien. En consecuencia, en el proceso civil contencioso, la relación jurídica debe trabarse entre personas concretas; no es factible que se pueda deducir una acción por o contra un sujeto indeterminado, incluso cuando el daño proviene de una actuación colectiva o grupal²⁵⁴.

Para cumplir con ello, la demanda debe individualizar tanto a quien la deduce, como contra quien se dirige (art. 254 N°s. 2 y 3 CPC). Tal exigencia incluso se debe cumplir cuando la acción busca proteger los derechos e intereses legítimos de sujetos indeterminados, como ocurre, por ejemplo, con la tutela preventiva para evitar un daño contingente que amenace a personas indeterminadas (art. 2333 del CC), o incluso en el caso de acciones populares o las relativas a la protección de intereses colectivos o difusos.

Para lograr esta determinación de sujetos, el legislador ha previsto la existencia de las medidas prejudiciales preparatorias, las que pueden ser solicitadas al juez para poder precisar al sujeto legitimado en el futuro juicio, conforme a las reglas del Libro II, Título IV del CPC, arts. 273 a 278 CPC.

Sólo en situaciones excepcionales el sujeto pasivo de la relación procesal puede quedar indeterminado, tal como acontece en los siguientes casos:

1°) En materia de recurso de protección, cuando el ilícito constitucional configura una agresión o amenaza a la integridad física o psíquica de una persona y el infractor no se puede determinar, dicha acción es admisible contra un sujeto indeterminado²⁵⁵. Ahora, para restablecer el imperio del derecho, la Corte de Apelaciones respectiva pedirá el informe de rigor a otros órganos públicos, con el objeto de recabar los antecedentes necesarios

²⁵⁴ Sobre el tema, RUPOLÁVEZ GARRZ, Pablo, "Responsabilidad extracontractual colectiva", en *Actualidad Jurídica*, N° 21, 2010, pp. 9-48.

²⁵⁵ Sobre el tema, RUIZ ALVAREZ, Lautaro, "La acción de protección en el ordenamiento jurídico chileno", en *Revista de Ciencias Sociales*, N° 53, 2008, pp. 158-160. También se puede justificar esta solución atendiendo a la naturaleza que se asigne al proceso previsto para esta acción (Sobre el tema, cfr. RORDALI SALAMANCA, Andrés, "El recurso de protección como proceso de urgencia", en *RCHD*, vol. 31 N° 2, 2004, pp. 269-288).

para no dejar al afectado sin la protección jurisdiccional de sus derechos fundamentales, si procede.

2°) Cuando se trata del ejercicio de la acción de tutela preventiva para proteger la vida del que está por nacer, el juez tiene el deber de adoptar todas las providencias que le parezcan convenientes para garantizar la existencia del concebido, siempre que crea que de algún modo peligra, las que pueden decretarse aunque el sujeto infractor no esté determinado (art. 75 CC).

3°) En ciertos procesos especiales, el legislador garantiza la dualidad de parte reconociendo a terceros la posibilidad de oponerse al acto constitutivo del derecho, sin que por ello el proceso deje de tener naturaleza contenciosa²⁵⁶. Como en estos casos no se puede precisar con antelación quiénes ejercerán esta prerrogativa, la dualidad de parte se cumple de una forma singular, ejerciendo el derecho de acción en contra de sujetos indeterminados.

Por último, es importante clarificar que el principio de dualidad de partes no obsta a que en un mismo proceso se puedan resolver distintos conflictos, o que varios procesos se reúnan en uno solo a través de la acumulación de autos (art. 92 CPC).

4. ALGUNAS PUNTUALIZACIONES SOBRE EL CONCEPTO DE PARTE

1°) La calidad de parte en la relación procesal se tiene aunque el demandante o el demandado no tenga la titularidad del derecho sustancial materia del objeto del proceso.

²⁵⁶ Un ejemplo de esta situación se contiene en el art. 86 del Código de Minería. En dicho precepto se dispone que "dictada la sentencia constitutiva de la concesión, quedan saneados todos los vicios procesales y las caducidades en que se pueda haber incurrido en la tramitación. Sin perjuicio de ello, toda sentencia que resuelva sobre la constitución de la concesión se notificará por el estado diario". Luego, el mismo precepto agrega, "una vez ejecutoriada conforme a lo dispuesto en el art. 174 del Código de Procedimiento Civil, la sentencia producirá cosa juzgada. Con todo, la excepción de cosa juzgada que emana de una sentencia constitutiva no será oponible respecto de quien haya promovido oportunamente una cuestión en juicio separado, con arreglo al inciso segundo del art. 34, ni de quien tenga derecho a ejercer alguna de las excepciones de nulidad contemplada en el art. 95". Igual técnica se sigue en la constitución de propiedad intelectual, al permitir que terceros que deseen cuestionar la petición de patente promuevan una oposición.

Como consecuencia de lo anterior, es posible que en un proceso la demanda se proponga por quien o contra quien no sea el sujeto legitimado activo o pasivamente. En la jurisprudencia este rasgo ha sido admitido por la Corte Suprema en la sentencia de 25 de julio de 1941, al declarar, "3.º Que (...), para los efectos procesales, no hay ningún interés en determinar si los sujetos de la relación procesal, esto es, las partes de la litis, son los titulares del derecho o la relación jurídica sustancial que en ella va a discutirse, o la forma como la sentencia los va a declarar afectados, supuesto que aun puede el actor no tener derecho alguno, sobre lo cual decidirá el fallo, y no por eso deja de ser parte en un proceso, es de todo punto para los efectos de determinar las partes en un proceso, es de todo punto de vista inútil investigar el interés que les mueve a obrar como quiera que puede haber interesados que queden extraños al pleito, esto es, que sean terceros, y partes que obren a nombre propio por un interés ajeno, como un acreedor, por ejemplo, que ejercita las acciones de su deudor"²⁵⁷.

Aunque la calidad de parte normalmente coincide con la titularidad del derecho sustancial discutido en el proceso, tal concordancia no es necesaria para el correcto desenvolvimiento del proceso. Un caso típico de esta situación se da con la acción que en interés de la moral o de la ley puede deducir un tercero para que se declare la nulidad del matrimonio celebrado entre parientes que no han respetado los impedimentos que surgen del parentesco por afinidad o consanguinidad (arts. 6º y 46 letra e) de la Ley de Matrimonio Civil N° 19.947) o los terceros que impugnan un contrato simulado²⁵⁸ o solicitan la declaración de inoponibilidad del mismo. En ese

²⁵⁷ CS, 25 de julio de 1941, RDJ, t. XXXIX, sec. 1ª, p. 128. Reitera la misma idea la sentencia de la C. de Ap. de Santiago, de 6 de mayo de 1993, al señalar: "3º Que en todo proceso se distinguen con claridad dos tipos de relaciones jurídicas. La primera es procesal y liga a las partes con el tribunal, con el objeto de que el proceso cumpla con sus fines, y la segunda, sustancial o material, pues dice relación con el derecho de fondo que invoca el actor en su demanda en contra del demandado".

"La relación procesal se ve viciada por el fado de las presupuestos procesales, como la jurisdicción, competencia absoluta, capacidad procesal o por algún defecto que anule el procedimiento, pero no sobre dicho por algún vicio que procure tener la relación jurídica sustancial, que es autónoma de la primera" (C. de Ap. de Santiago, 6 de mayo de 1993, RDJ, t. LXXX, sec. 2ª, p. 41).

²⁵⁸ Sobre el tema, ALCALDE ROSALES, Enrique, "La simulación y los terceros: consideraciones civiles y penales", en RCHD, vol. 27 N° 2, 2000, pp. 265-289; ROSENDE ALVAREZ, Hugo, "La simulación y la jurisprudencia", en Actualidad Jurídica N° 11, 2005, pp. 53-85.

evento, aunque el actor no es parte en el contrato, puede adquirir dicha calidad en la relación procesal, como demandante.

2ª) La calidad de parte en la relación procesal la puede adquirir toda persona que tenga capacidad procesal, aunque carezca de legitimación activa o pasiva. La falta de legitimación no afecta la validez de la relación procesal, atendida que se trata de una condición de la acción. Por esta razón, aunque el demandado no sea el sujeto legitimado, debe hacer uso de los derechos y cumplir con las cargas u obligaciones que son inherentes a su condición de parte, para evitar que se produzcan consecuencias desfavorables en su contra.

3ª) Adquiere la calidad de parte el litigante rebelde, esto es, aquel demandado que adopta una actitud pasiva después de ser emplazado válidamente al juicio²⁵⁹.

4ª) La calidad de parte la adquiere el representado y no el representante. Por lo mismo, el abogado no es parte en el proceso civil²⁶⁰.

5ª) Como las partes deben ser necesariamente dos, tampoco es factible que una misma persona pueda, al mismo tiempo, ser demandante y demandado²⁶¹. En efecto, no se concibe la presentación de una demanda contra sí mismo, ni siquiera cuando se tiene la calidad de representante de otra persona.

En la jurisprudencia recoge esta prohibición una sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago, de 5 de abril de 2006, al declarar nulo todo lo obrado por un mandatario judicial que actuaba al mismo tiempo por ambas partes, solicitando un divorcio de común acuerdo. En lo concreto, allí se

²⁵⁹ Sobre el tema, CARRASCO POBLETE, Jaime, *La rebeldía en el proceso civil y laboral chileno*, Santiago: Abeledo Perrot, 2010, pp. 51-65.

²⁶⁰ C. Ap. de Valdivia, 14 de mayo de 1926, RDJ, t. XXIII, sec. 2ª, p. 82.

²⁶¹ Esta limitación no se da en los denominados *pro ex* o juicios universales, que se utilizan para dar respuesta a conflictos vinculados a un patrimonio universal (*universitas rerum*) o a un conjunto de bienes y derechos como una unidad. En ellos se puede adquirir al mismo tiempo la calidad de demandante y demandado. El ejemplo más típico en nuestro ordenamiento se presenta en el juicio de partición de bienes.

resolvió que, "como puede advertirse, ninguno de los objetivos previstos por el legislador puede ser satisfecho si es una misma y única persona la que sustenta el juicio como representante de ambos litigantes. En efecto, si bien la autocontratación es generalmente aceptada en materia civil, ella no tiene cabida en los procedimientos judiciales contenciosos, que llevan implícita la concurrencia de intereses contrapuestos. Así se desprende de diversas disposiciones que impiden que un representante pueda defender judicialmente los intereses de su representado, como los artículos 263 y 265 del Código Civil, referidos a casos en que el hijo menor deba litigar contra el padre o madre que ejerce la patria potestad, para cuyo efecto habrá de designarse un curador ad litem; o el artículo 506 del mismo cuerpo legal, que dispone que no pueden ser tutores o curadores de una persona los que litigan contra ella, por intereses propios o ajenos. Finalmente, cabe advertir que el artículo 232 del Código Penal sanciona al abogado que, teniendo la defensa de un juicio, patrocinar a la vez a la parte contraria"²⁶².

6º) La dualidad de partes en ocasiones debe ser integrada por el letrado, admitiendo que participen en una determinada posición ciertos órganos a los que se les reconoce legitimación extraordinaria o una facultad de representación para actuar en nombre de ciertas personas. Procediendo de ese modo se garantiza al juez que resuelva el conflicto con la debida contradicción entre partes. Los ejemplos más típicos, como más adelante se explicará, surgen con los curadores de bienes o de personas y en la actuación del defensor público para el caso de los ausentes.

7º) La dualidad de partes no se altera aunque entre el demandante y el demandado no exista una controversia efectiva, por ejemplo, si se produce un allanamiento a la demanda o no se contradicen los fundamentos de la misma (art. 313 CPC).

8º) No se puede ignorar que, bajo ciertos supuestos, la relación procesal puede tener una mayor complejidad, admitiendo que se incorporen al proceso pendiente algunos sujetos que originalmente no han adquirido la calidad de partes.

²⁶² C. de Ap. de Santiago, 5 de abril de 2006, RDI, t. CIII, sec. 2ª, pp. 213-214.

5. DETERMINACIÓN DE LAS PARTES EN UN PROCESO

El Código de Procedimiento Civil no señala quién tiene la calidad de parte, ni tampoco cómo se adquiere tal condición en la relación procesal²⁶³.

En doctrina predomina la idea que la calidad de parte se adquiere por el solo hecho de proponer una demanda, o por el solo hecho de figurar como demandante o demandado en el proceso²⁶⁴.

Para cumplir lo anterior, el escrito de demanda debe contener el nombre, domicilio y profesión u oficio del demandante y del demandado, de quienes los representan, y la naturaleza de la representación (art. 254 N°s. 2 y 3 CPC).

Aunque lo común será que la relación procesal concluya con los que asumieron originariamente el rol de demandante y demandado, también se pueden producir algunas modificaciones, en virtud de las cuales otros sujetos adquieren la calidad de partes.

Lo anterior se vincula con la intervención de terceros, la sucesión procesal y el litisconsorcio derivativo.

²⁶³ En este punto existe una diferencia con el proceso penal, donde la calidad de parte es determinada por la ley. Para tal efecto, el art. 12 del Código Procesal Penal señala: "para los efectos regulados en este Código, se considerará intervinientes en el procedimiento al fiscal, al imputado, al defensor, a la víctima y al querellante, desde que realicen cualquier actuación procesal o desde el momento en que la ley les permite ejercer facultades determinadas" (art. 12 CPP).

²⁶⁴ Entre varios, SERRA DOMÍNGUEZ, Manuel, "Intervención de terceros en el proceso", en *Estudios de Derecho Procesal*, Barcelona: Ariel, 1969, p. 207 y en su trabajo, "Precisiones en torno a los conceptos de parte, capacidad procesal, representación y legitimación", en *Justicia* 87, N° II, p. 290; RAMOS MÉNDEZ, Francisco, *Derecho Procesal Civil*, Barcelona: J.M. Bosch, T. I, 1992, 5ª ed. p. 309; CALAMANDREI, Piero, *Instituciones de Derecho Procesal Civil*..., ob. cit., vol. II, p. 297; ROSENBERG, Leo, *Tratado de Derecho Procesal Civil*, ob. cit., T. II, p. 211; LIEBMAN, Enrico T., *Manual de Derecho Procesal Civil*, ob. cit., p. 142; ALCALÁ-ZAMORA, Niceto, "Puntualizaciones relativas al concepto de parte", en *Revista de Derecho Procesal Iberoamericana*, 1983, N° I, pp. 103-134; MANDRIOLI, Crisanto, *Corso di diritto processuale civile*, Torino: Giapichelli, 2001, p. 174; PROTO PISANI, Andrea, *Lezioni di Diritto Processuale Civile*, ob. cit., pp. 305-306.

Sin perjuicio de su posterior desarrollo, anticipemos el contenido esencial de estas instituciones:

- La intervención de terceros se refiere al ingreso a un proceso pendiente de sujetos que entran a participar junto a las partes originarias con el objeto de ejercer su derecho de defensa.
- La sucesión o cambio de parte se produce cuando el demandante o el demandado, mediante una resolución judicial que lo autoriza, deja de ocupar su sitio en el proceso y es reemplazado por otro sujeto, al haberse producido una transferencia o una transmisión del derecho subjetivo que forma parte del objeto del proceso.
- El litisconsorcio surge cuando en un proceso concurren varias personas actuando en una misma posición de parte. Según su origen, el litisconsorcio puede ser originario o derivativo. El originario es aquel que se presenta desde el inicio de la relación procesal; en cambio, el litisconsorcio derivativo o sucesivo surge después de iniciado el proceso, cuando ingresa un litisconsorte que hasta ese momento no participaba en la relación procesal.

6. LA INTERVENCIÓN DE TERCEROS EN LA RELACIÓN PROCESAL

6.1. Base dogmática de la intervención

Tradicionalmente se ha definido al tercero en forma negativa, esto es, como aquel sujeto que no es parte de la relación jurídica.

Sin embargo, en el campo procesal ha ido surgiendo un concepto positivo de tercero, que busca resolver una serie de problemas en torno a los efectos que una sentencia judicial puede tener en la situación jurídica de ciertos sujetos que no adquirieron la calidad de parte.

La revisión de esta materia ha llevado a proponer una sistematización de los distintos tipos de terceros verificables en el ámbito procesal civil. Como lo explica Grande, "no todos los terceros se hallan en la misma situación frente al proceso seguido *inter alios*, sino que, en función de la conexión existente entre su situación jurídica y la deducida por las partes en el proceso, la decisión que en éste se adopte puede repercutir de modo

más o menos intenso en aquélla, lo que permite encuadrarlos en distintas categorías"²⁶⁵.

Lo primero en este tema es distinguir entre el tercero en sentido meta-jurídico o vulgar y el tercero en sentido técnico²⁶⁶.

El tercero en sentido metajurídico o vulgar es aquel que no puede ser alcanzado por los efectos directos o indirectos de la sentencia, por no tener ninguna relación con los derechos que conforman el objeto del proceso. Se trata de personas que, por ser ajenas al litigio y no tener ningún interés en él, no necesitan estar protegidas por el ordenamiento jurídico.

En cambio, el tercero en sentido técnico comprende a todos aquellos que sin ser parte se encuentran respecto del objeto del proceso en una determinada posición, que el ordenamiento jurídico considera o debe considerar en alguna hipótesis de *intervención* voluntaria o forzada.

Sin perjuicio de los matices teóricos, la doctrina ha podido distinguir dentro de los terceros en sentido técnico las siguientes hipótesis:

²⁶⁵ GRANDE SEARA, Pablo, *La extensión subjetiva de la cosa juzgada en el proceso civil*, Valencia: Tirant, 2008, p. 27.

²⁶⁶ Han sistematizado esta materia, entre otros, ORTELLS RAMOS, Manuel, *Derecho Procesal Civil*, ob. cit., pp. 110-112; MONTERO AROCA, Juan, *La Intervención Adhesiva Simple. Contribución al Estudio de la Pluralidad de Partes en el Proceso Civil*, ob. cit., pp. 189-190; *La Legitimación en el Proceso Civil (Intento de aclarar un concepto que resulta más confuso cuanto más se escribe sobre él)*, Madrid: Civitas, 1994, pp. 75-76; LÓPEZ-FRACOSO, Tomás, *La intervención de terceros a instancia de parte en el proceso civil español*, Madrid: Marcial Pons, 1990, pp. 9-268; CABANAS GARCÍA, Juan Carlos, *La tutela judicial del tercero*, Madrid: Difusa, 2005, pp. 25-351; FERNÁNDEZ LÓPEZ, Miguel Ángel, *La tercería de dominio*, Madrid: Montecorvo, 1980, pp. 255-256; NIEVA FENOLL, Jordi, *La cosa juzgada*, Barcelona: Atelier, 2006, pp. 198-225; GRANDE SEARA, Pablo, *La extensión subjetiva de la cosa juzgada en el proceso civil*, ob. cit., pp. 105-126; OROMÍ VALL-LLOVERA, Susana, *Intervención voluntaria de terceros en el proceso civil*, Madrid: Marcial Pons, 2007, pp. 36-42; FERRÉ MARTÍ, José María, *Protección procesal del tercero en el derecho canónico*, Barcelona, 1982, pp. 31-35; ÁLVAREZ ABUNDANCIA, Ricardo, "La tercería y la oposición de tercero", en *Revista de Derecho Privado*, 1963, pp. 436-477; ALSINA, Hugo, "Unificación de la legislación acerca de la intervención de terceros en la relación procesal", en *Revista de Derecho Procesal*, 4, 1957, pp. 295-319; MUÑOZ ROJAS, Tomás, "El interés en el proceso civil", en *Temis*, Facultad de Derecho Universidad de Zaragoza, 1958, p. 62.

1º) Terceros a los que el contenido de la sentencia que se pronuncie en el proceso seguido *inter partes*, pueda ocasionarles algún *perjuicio jurídico*.

2º) Terceros que son titulares de una relación jurídico-material conexa o prejudicial con, a lo menos, una de las partes. En este caso, la sentencia que se dicte actuará como un hecho jurídico constitutivo, modificativo o extintivo del derecho o interés legítimo del tercero.

3º) Terceros que pueden ser titulares de la misma relación jurídica que ha sido deducida por una de las partes en el proceso²⁶⁷.

4º) Terceros que pueden ser titulares de una relación jurídica incompatible con la que es objeto del proceso entre partes (por ejemplo, el tercero que señala ser el propietario de la cosa cuyo dominio controvierten el demandante y el demandado en el proceso pendiente).

En el terreno de los principios, cada una de esas situaciones debería contar con algún instrumento que permita a dichos terceros ejercer su derecho de defensa en el proceso pendiente²⁶⁸.

²⁶⁷ Un ejemplo de esta situación se da en el art. 133 bis de la LSA. A los socios que no demandaron ejerciendo la acción derivativa les interesa el resultado del proceso iniciado por el socio o los socios —que reúnan el 5% de las acciones emitidas— o el director de la sociedad. Otra hipótesis se puede dar en relación a la reparación del medio ambiente dañado, conforme a la legitimación que señala el art. 54 de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente.

²⁶⁸ En esta sistematización ha tenido importancia la revisión que la doctrina civil ha efectuado del principio del efecto relativo de los contratos, especialmente, por el desarrollo de la figura del contrato conexo o coligado. Esta última categoría ha servido para resolver los problemas de actos o contratos que, no obstante estar celebrados separadamente buscan un determinado fin económico compartido entre un grupo de personas naturales o jurídicas. Sobre el tema, PRZAGO WILSON, Carlos, "El efecto relativo de los contratos: partes y terceros", *El Código Civil de Chile* (1855-2005), Santiago: Editorial Lexis Nexis, 2007 (A. Guzmán B. coord.), pp. 551-567; LÓPEZ SANTA MARÍA, Jorge, "Las cadenas de contratos o contratos coligados", en *Revista de Derecho de la Universidad Católica de Valparaíso* (1998): "Actas del II Congreso Chileno de Derecho Privado", p. 159; FIGUEROA YÁÑEZ, Gonzalo, "El efecto relativo en los contratos conexos", en *Nuevas Tendencias del Derecho* (VV.AA.), Santiago: Editorial LexisNexis, 2004, pp. 67-81; VILLA, Gianroberto, "Pluralidad de contraendi e inadempimiento", en *Rivista di Diritto Civile*, N° 2, 2002, pp. 197-212.

6.2. La necesidad de proteger al tercero en un juicio pendiente

Para entender cómo actúan los mecanismos procesales previstos para proteger a los terceros de los efectos de una sentencia en un proceso *inter partes*, la doctrina ha propuesto distinguir entre los efectos directos y reflejos de la sentencia.

La diferenciación entre efectos directos y efectos reflejos tiene como punto de partida un trabajo publicado en 1871 por Rudolf von Ihering (1818-1892)²⁶⁹, quien examinó las consecuencias que, en la realidad, puede producir la suscripción de diversos actos jurídicos²⁷⁰.

El planteamiento anterior fue tomado para el derecho procesal por Adolf Wach (1843-1926)²⁷¹, distinguiendo tres categorías de posibles efectos que

²⁶⁹ Rudolf von Ihering nació el 22 de agosto de 1818 en Aurich (Austria) y falleció el 17 de septiembre de 1892. Cursó estudios, sucesivamente, en las Universidades de Halle, Múnich, Gotinga y Berlín, hasta obtener el grado de doctor. Obtuvo la cátedra de Derecho romano en la Universidad de Basilea el año 1845. Es considerado como un "gran renovador del método jurídico". A partir de él existe una más explícita metodología jurídica. Las cuestiones de índole metodológica han cobrado un giro peculiar, descansando desde entonces en muchos aspectos nuevos, de forma que el sentido actual de la metodología jurídica es, en buena parte, consecuencia inmediata o mediata del cambio de sesgo por él impuesto. Tanto la jurisprudencia de intereses como los métodos sociológicos imperantes enlazan directamente con Rudolf von Ihering. "El centro de gravedad de la evolución del pensamiento jurídico, antes de Ihering, estaba en la lógica y en la norma. A partir de él se introducen elementos sociológicos, culturales e históricos como ingredientes de los intereses dignos de protección. Y, por lo mismo, también las corrientes hoy día dominantes que tienden a incorporar al ámbito del Derecho las exigencias de la persona evidenciadas como justas y razonables, encuentran de alguna manera enlace con caminos abiertos por Ihering" (LÓPEZ JACOISTE, José Javier, "Rudolf von Ihering", en *Juristas Universales* (DOMINGO, Rafael, editor), Marcial Pons, 2004, t. III, pp. 308-312).

²⁷⁰ Sobre el alcance de esta doctrina, *cf.* Díez-Piçazo, Luis, *La representación en el derecho privado*, Madrid: Civitas, 1979, pp. 264-283.

²⁷¹ En explicación de De la Oliva, Adolf Wach, junto a Oskar von Bülow o Josef Kohler, el trío de grandes autores a los que puede atribuirse primordialmente, aunque no con exclusividad, la formación de la moderna ciencia procesal. Wach es el verdadero patriarca del procesalismo clásico alemán, con profunda y extensa influencia en Italia (sobre todo a través de Chiovenda), en Suiza, en Finlandia y en España e Hispanoamérica, merced a las traducciones. Nació en Kulm, Prusia occidental, el 11 de septiembre de 1843. Estudió derecho en Berlín y obtuvo el grado de doctor en 1865. Enseñó en Königsberg, Rostock, Tübinga y finalmente en Leipzig.

una sentencia puede generar para los terceros: los de condena, los constitutivos y los declarativos²⁷².

A la propuesta anterior le sobrevendrían otras explicaciones de la doctrina alemana (Kuttner, Hellwig, Goldschmidt, Kisch, Schöнке, Rosenberg, etc.). En Italia el tema sería introducido por Chiovenda en sus *Principios de Derecho Procesal Civil*, en relación a la eficacia de la cosa juzgada para terceros. Luego vendría una proliferación de aportaciones en los trabajos de Allorio, Liebman, Carnelutti, Costa, Redenti, Calamandrei, Trocker, Balena, entre otros²⁷³.

La preocupación por los efectos directos y reflejos de la sentencia judicial ha motivado la realización de distintos estudios, donde se ha demostrado que la tesis tradicional, acerca que el efecto de cosa juzgada agota todas las consecuencias que ésta produce en la realidad, debe ser superada. En explicación de Liebman, la concepción clásica de la cosa juzgada duró hasta el día "en que se hizo el análisis del contenido y de los efectos de la sentencia, descubriéndose que los mismos pueden ser de índole muy diversa según los casos"²⁷⁴.

Como lo sintetiza Rosende, "la sentencia puede ser contemplada desde dos puntos de vista: como *acto* y como *hecho jurídico*". "Con la

donde muere el 4 de abril de 1926 (De La Oliva, Andrés, "Adolf Wach", en *Juristas Universales* (Domínguez, Rafael, editor), Marcial Pons, 2004, t. III, pp. 522-525).

²⁷² WACH, Adolf, *Manual de Derecho Procesal Civil* (tr. Banzhaf), T. I, Ediciones Jurídicas Europa-América, Buenos Aires, 1977, p. 32.

²⁷³ En esta síntesis hemos seguido a MONTERO AROCA, Juan, *La Intervención Adhesiva Simple. Contribución al Estudio de la Pluralidad de Partes en el Proceso Civil*, ob. cit., p. 190, y la monografía de ROSENDE VILLAR, Cecilia, *La eficacia frente a terceros de las sentencias contencioso administrativas*, Pamplona: Aranzadi, 2002, pp. 19-65; GRANDE SEARA, Pablo, *La extensión subjetiva de la cosa juzgada en el proceso civil*, ob. cit., pp. 57-58, especialmente la nota 58.

²⁷⁴ Cfr. LIEBMAN, Enrico. T, *Eficacia y autoridad de la sentencia*, Buenos Aires: Ediar (tr. Sentís Melendo), 1946, p. 22. A este autor se le debe la distinción entre cosa juzgada y eficacia de la sentencia. A partir de este aporte se hizo general la aceptación de que los efectos reflejos derivaban de la sentencia y no de la cosa juzgada. Para Liebman la cosa juzgada no es un efecto de la sentencia, sino una cualidad de inmutabilidad de los efectos de la sentencia (declarativos, constitutivos y de condena). La sentencia, conforme a esta doctrina, tendría una eficacia general, que deriva de su naturaleza de acto de autoridad proveniente de un órgano del Estado.

expresión sentencia como *acto* nos referimos a la declaración de voluntad del juez sobre el objeto sometido a su decisión una vez alcanzada una decisión sobre el mismo. Al resolver la controversia jurídica, del pronunciamiento del juez se derivan una serie de efectos queridos y previstos por el mismo en la resolución y perseguidos por las partes al promover el proceso. Son los *efectos directos*, esto es, los constitutivos, declarativos o de condena, dependiendo de la pretensión ejercitada, así como el efecto de cosa juzgada". "De otro lado, la sentencia se puede considerar también como *hecho jurídico*. Se alude con este concepto al mismo fenómeno contemplado desde una perspectiva diversa: como acaecimiento desligado de la voluntad del juzgador. Por la mera existencia de un pronunciamiento judicial se constatan determinados efectos no queridos ni previstos por el juez en la resolución, ni perseguidos directamente por las partes al promover el proceso. Son los efectos *indirectos, colaterales, secundarios o reflejos*, cuando van referidos a los terceros. Puesto que no se pueden atribuir directamente a la declaración de voluntad en que consiste la sentencia, pues están fuera del objeto de la misma, su causa inmediata debe hallarse en una circunstancia diversa, esto es, en la ley o en la conexión de las situaciones jurídicas. La sentencia, como hecho jurídico, se integra en el supuesto de hecho de normas de las que se derivan efectos -colaterales o reflejos- con un contenido determinado y diverso en cada caso"²⁷⁵.

En virtud de todo lo anterior, el proceso civil debe contemplar instrumentos que permitan a esos terceros actuar en alguna hipótesis de lo que genéricamente se denomina como *intervención procesal*.

²⁷⁵ ROSENDE VILLAR, Cecilia, "Efectos directos y reflejos de la sentencia", en *Revista Chilena de Derecho*, vol. 28 N° 3, 2001, pp. 493-494 y en "Eficacia directa y refleja de la sentencia" en *Revista de Derecho Procesal*, N°s. 1-3, 2002, pp. 439-479. En similar orientación, Grande señala que "tales efectos, que normalmente se caracterizan por su involuntariedad, se producen cuando existe conexión y dependencia entre las distintas relaciones o situaciones jurídicas, y se concretan en que los efectos jurídicos-materiales directos (declarativos, de condena o constitutivos) derivados de la sentencia que decide sobre la relación prejudicial integran, total o parcialmente, el supuesto de hecho de la norma que rige la relación dependiente, que los toma como hechos constitutivos, modificativos o extintivos de ésta, y extrae de ellos ciertas consecuencias jurídicas para los titulares de la relación o situación jurídica dependiente que es objeto de regulación". (GRANDE SEARA, Pablo, *La extensión subjetiva de la cosa juzgada en el proceso civil*, ob. cit., p. 26).

Ahora, según la iniciativa a participar en la relación procesal, se distingue entre intervención voluntaria e intervención provocada (también denominada como forzada o coactiva). En la voluntaria, el tercero legitimado concurre libremente al proceso en curso para defender sus derechos o intereses; en la intervención provocada, en cambio, el tercero ingresa al juicio, a petición de parte o por orden del juez, bajo la amenaza de producirse en su contra algún efecto jurídico si no comparece a dicho proceso.

7. LA INTERVENCIÓN VOLUNTARIA EN EL PROCESO DECLARATIVO

A través de la intervención voluntaria un tercero deviene a un proceso pendiente, ejerciendo su derecho de defensa para evitar que la sentencia judicial que allí se pronuncie le provoque algún efecto desfavorable.

En el proceso de declaración, los supuestos para que proceda la intervención son²⁷⁶:

- 1º) La existencia de un proceso pendiente; y
 - 2º) Que, de conformidad a la ley, se justifique el ingreso del tercero, por ser titular de un derecho o interés jurídico comprometido en el proceso.
- La intervención voluntaria comprende diversas manifestaciones. El CPC se ocupa de reglamentar tres formas de intervención de esta clase, a saber: el tercero coadyuvante, el tercero principal y el tercero independiente²⁷⁷.

A lo anterior se debe agregar la regulación prevista en leyes especiales que ha introducido otras hipótesis de intervención, a través de las cuales

²⁷⁶ El mecanismo de protección de los terceros en un juicio ejecutivo se obtiene a través de las *tercerías*. Se trata de un derecho de intervención singular, propia de la ejecución. En la jurisprudencia se ha resuelto que en el juicio ejecutivo no se aplica la intervención de los arts 22 y 23 del CPC (CS, 08 de junio de 2006, Rol N° 12-2004, LegalPublishing: 34638; C. de Ap. de Santiago, 7 de agosto de 1986, RDJ, t. LXXXIII, sec. 2ª, p. 63). En sentido contrario C. de Ap. de Valparaíso, 13 de mayo de 1998, LegalPublishing: 19729.

²⁷⁷ La jurisprudencia ha ampliado el mecanismo protector de los derechos de terceros reconociendo legitimación para impugnar resoluciones dictadas en un proceso en el que no han sido parte, si aparece claramente establecido que tiene un interés jurídico comprometido para deducir el recurso (CS, 22 de julio de 1993, RFM N° 416, p. 467).

se admite que ciertos entes públicos puedan ingresar voluntariamente a procesos pendientes, como ocurre con el Consejo de Defensa del Estado²⁷⁸, con el Fiscal Nacional Económico, el Sernac, entre otros.

En lo que sigue examinaremos las figuras previstas en el CPC, por tratarse del derecho de común aplicación en esta materia.

8. LA INTERVENCIÓN DEL TERCERO COADYUVANTE

8.1. Descripción general

La manera más clásica de intervenir voluntariamente en un juicio es como tercero coadyuvante²⁷⁹.

Nuestro legislador reconoce esta figura en el art. 23 del CPC, disponiendo que, "los que, sin ser partes directas en el juicio, tengan interés actual en sus resultados, podrán en cualquier estado de él intervenir como coadyuvantes (...)".

Como su nombre lo indica, se trata de un tercero que, por encontrarse en una determinada posición respecto del objeto del proceso, desea ingresar voluntariamente a colaborar con una de las partes para obtener una sentencia favorable. Como lo ha precisado la Corte de Apelaciones de Valparaíso, "el tercero coadyuvante debe tener interés actual en los resultados del juicio, pero éste debe ser armónico con el interés de alguna de las partes"; "(...) no existe, ni en la legislación ni en la doctrina la figura del *tercero coadyuvante excluyente*"²⁸⁰.

Normalmente, este tipo de intervención surge en procesos en los que la sentencia podría declarar la extinción de un acto o contrato del que se

²⁷⁸ Cfr. C. Ap. San Miguel, 23 de diciembre de 1992, *Gaceta Jurídica* N° 165, 1994, p. 136.

²⁷⁹ Sobre el tema cfr. Couture, Eduardo, "Legitimación del tercero coadyuvante", en *Estudios de Derecho Procesal Civil*, B. Aires: Depalma, 1998, T. III, pp. 217-231; González Videla, Alberto, *La intervención del tercero coadyuvante en el proceso civil chileno*, Memoria de Prueba, Universidad de los Andes, 2000; Rodríguez Garcés, Sergio, *Tratado de las tercerías*, ob. cit., T. I, pp. 173-199.

²⁸⁰ C de Ap. de Valparaíso, 18 de agosto de 2006, MJ 18192.

deriva el derecho del tercero. Por ejemplo, si la sentencia judicial declara terminado el contrato de arrendamiento, se extingue, consecuentemente, el subarrendamiento; si se declara nulo un testamento, el legatario perderá su derecho en esa asignación, etc.

Esta intervención puede darse tanto para la defensa de derechos con contenido patrimonial como extrapatrimonial, debiendo justificar el tercero en cada caso la situación legitimante que hace valer para solicitar su ingreso al juicio.

Una antigua sentencia de la Corte Suprema, de 8 de julio de 1925, resolvió que para admitir a este tercero el artículo 24 [actual 23] del Código de Procedimiento Civil, ni ninguna otra ley exige que el derecho comprometido en juicio en que intente coadyuvar, sea únicamente el de dominio sobre la cosa litigada o de una cuota de ella²⁸¹.

En la jurisprudencia ha surgido la dificultad para delimitar qué debe entenderse tener comprometido un derecho y no una mera expectativa. Como la ley no define los vocablos derecho y mera expectativa, no resulta adecuado atribuir a esos términos el significado que podría resultar si se aplica a la ley de 1861, sobre el efecto retroactivo de las leyes. En general, el tercero coadyuvante ingresa al proceso para evitar que se produzca en su contra un efecto jurídico desfavorable, como podría ser el surgimiento de una responsabilidad por el saneamiento por vicios redhibitorios²⁸²; la pérdida de un interés legítimo, si se consuma un determinado acto procesal (por ejemplo, el arrendatario de un bien raíz comprado mediante un leasing puede perder su derecho de opción si el dueño pierde el dominio por el pronunciamiento de una sentencia judicial desfavorable).

8.2. Estatuto jurídico del coadyuvante

8.2.1. Oportunidad y autonomía de la intervención

Para intervenir en el proceso pendiente, el tercero coadyuvante deberá formular una petición solicitando su ingreso. Este derecho se puede ejercer

²⁸¹ CS, 8 de julio de 1925, RDI, t. XXII, sec. 1ª, p. 265.
²⁸² Sobre el tema, C. de Ap. de San Miguel, 20 de agosto de 1992, G.I., N° 146, pp. 54-55.

en cualquier estado de la relación procesal, ante el juez o tribunal que conoce de la causa, sea que éste actúe o no técnicamente como una instancia.

Dicha petición deberá ser tramitada conforme a las reglas de los incidentes ordinarios (arts. 82 y ss. del CPC).

Como esta figura está ubicada dentro de las normas comunes a todo procedimiento en el CPC, también se ha reconocido el derecho a intervenir en procesos especiales, como el recurso de protección²⁸³, en el reclamo de ilegalidad municipal²⁸⁴, en un proceso de quiebra²⁸⁵, entre otras posibilidades.

Frente a la solicitud de intervención, las partes pueden adoptar alguna de las siguientes actitudes: i) allanarse; ii) guardar silencio; iii) oponerse. En este último evento, lo normal será que cuestionen la falta de legitimación para participar en el proceso.

La petición de ingreso al proceso pendiente obliga al juez a verificar la legitimación invocada por el tercero, con el objeto de evitar que se incorporen sujetos motivados por razones ajenas a las jurídicas, como podrían ser las de carácter filantrópico o meramente ideológicas²⁸⁶.

²⁸³ C. de Ap. de S. Miguel, 27 de julio de 1995, RDI, t. XCII, sec. 5ª, p. 219; C. de Ap. de Valparaíso, 7 de septiembre de 2009, Rol N° 256-09, MJ 21675.

²⁸⁴ CS, 18 de diciembre de 1985, RDI, t. LXXXIII, vol. III, sec. 5ª, p. 259.

²⁸⁵ El art. 64 inc. 3º de la Ley N° 18.175 sobre Quiebras establece que "la administración de que es privado el fallido pasa de derecho al síndico, quien la ejercerá con arreglo a las disposiciones de esta ley. En consecuencia, no podrá el fallido comparecer en juicio como demandante ni como demandado, en lo relacionado con los bienes comprendidos en la quiebra, sin perjuicio de tenersele como coadyuvante...". El inc. 5º del citado artículo dice además que "el síndico podrá figurar como parte coadyuvante en los juicios de separación de bienes y de divorcio en que el fallido sea demandado o demandante".

²⁸⁶ En la historia del CPC, cuando se discutió la norma de legitimación del tercero coadyuvante, en la sesión 38 de 20 de noviembre de 1900, el señor Yáñez indicó que: "considera que la definición que contiene el inciso segundo ofrece el inconveniente de establecer que en una incidencia de mero trámite, como es el de pronunciarse sobre la entrada al pleito de un tercero, pueda dictarse una resolución que afecta la naturaleza de la acción como es la calificación de si el tercero tiene un derecho o una mera expectativa. Agrega que este prejulgamiento no existiría refiriéndose solamente al interés actual, como lo hace la primera parte del artículo, pues este interés actual, que en general es una cuestión de hecho, no altera la naturaleza i alcance de

Agotada la tramitación del incidente, el juez o tribunal dictará una resolución aceptando o rechazando el ingreso del tercero.

Una vez admitida la intervención del coadyuvante, éste adquiere la calidad de parte, debiendo respetar todo lo obrado hasta ese instante²⁸⁷. Lo anterior se justifica como una medida para evitar que el demandante o el demandado quieran acudir a esta figura con el propósito de remediar alguna omisión en el ejercicio de sus derechos procesales.

8.2.2. Prerrogativas procesales del coadyuvante

El coadyuvante admitido a intervenir puede ejercer, según la oportunidad en que se haya admitido su ingreso, alguno de los siguientes derechos:

1º) Hacer las alegaciones que estime conducentes, sin entorpecer la marcha regular del juicio. Esto significa que podrá ejecutar todos los actos procesales inherentes a su calidad de parte, utilizando los plazos que estén corriendo o los que principien en dicho proceso, para la defensa de sus derechos o intereses legítimos a través de la colaboración con una de las partes. También podrá solicitar la ampliación de los términos judiciales, si procede de conformidad a la ley.

2º) Rendir las pruebas que estime conducentes, pero sin entorpecer la marcha regular del juicio.

3º) Interponer los recursos a que haya lugar, conforme a las reglas generales. Esta prerrogativa se explica porque al tercero coadyuvante, por el

los derechos que el tercero pretende ejercitar. Por último hace notar que la definición indicada daría lugar a dificultades en la marcha del juicio, por cuanto las partes se inclinarían a negar la existencia del derecho del tercero i a pedir que fuera éste calificado de mera expectativa. Los señores Montt, Richard i Vergara creen que las dificultades de que ha hablado el señor Yáñez se presentarían de igual manera con la definición objetada o sin ella i que, en cambio, hai positiva ventaja en conservarla sino se quiere que pueda darse un alcance que la lei no ha querido a lo que ella entiende por interés actual" (Actas de la Comisión Mixta de senadores y diputados, Santiago: Imprenta Nacional, 1901, p. 17).

²⁸⁷ CS, 13 de enero de 1947, RDJ, t. XLIV, sec. 1ª, p. 441, al disponer que, "al litigante que comparece al pleito cuando ya se ha dictado sentencia definitiva, le afecta la totalidad de su resultado y en especial lo obrado con anterioridad a su comparecencia".

hecho de haber ingresado como parte, le alcanza el efecto de cosa juzgada de la sentencia que allí se pronuncie (art. 24 CPC)²⁸⁸.

En el ejercicio de estos derechos, el coadyuvante cuenta con plena autonomía respecto de la parte a quien contribuye en la defensa, sin perjuicio de la coordinación que podría surgir entre ellas y de la actuación a través del procurador común.

Sin embargo, la naturaleza del coadyuvante no le autoriza a realizar los actos procesales que signifiquen una disposición del objeto del proceso. En este caso, su actuación queda subordinada a lo que realice la parte a la que coadyuva. Como lo ha puntualizado una sentencia de la Corte de Apelaciones de Concepción, de 19 de julio de 2000, "los derechos que la ley reconoce al tercero coadyuvante lo asimilan a la parte coadyuvada, pero no lo transforma en parte (R.D. y J. Tomo XXXI, 2ª Parte, Secc. 1ª, pág. 414) y si bien puede ejercer una amplia gama de derechos, está limitado respecto del ejercicio de otros que son consecuencia del hecho de no ser parte, como por ejemplo desistirse de la demanda (artículo 148 Código de Procedimiento Civil reservado al actor); modificar la demanda (artículo 261 Código de Procedimiento Civil reservado al actor); avenir o conciliar (artículo 262, Código de Procedimiento Civil, reservado a las partes), etc. Es interesante señalar que si las partes propiamente terminan un proceso bien sea por transacción, desistimiento, abandono, etc., el coadyuvante no podrá continuarlo o seguir su tramitación (misma cita anterior R.D. y J.)²⁸⁹.

²⁸⁸ En tal sentido, CS, 7 de agosto de 2007, Rol N° 4237-05 (MJ 15510).

²⁸⁹ C. de Ap. de Concepción, 19 de julio de 2000, Rol N° 1.097-95, LegalPublishing: 22134. De igual forma, se ha resuelto que para efectos del abandono del procedimiento, los sujetos activos y pasivos del proceso son los que tienen la responsabilidad de instar para que la controversia se resuelva mediante la dictación de la sentencia definitiva, lo cual excluye a quienes por tener interés actual en sus resultados intervienen como terceros en uso de la facultad que otorga el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil. Consecuente con lo anterior, se estimó que la adhesión a la demanda formulada por un coadyuvante no pudo producir como efecto la interrupción del plazo del abandono del procedimiento, ya que ello no es una gestión útil para dar curso progresivo a los autos, por cuanto, los actores eran los únicos que podían subsanar los defectos de una demanda declarada inepta al acogerse una excepción dilatoria (C. de Ap. de Santiago, 17 de mayo de 1993, Rol N° 1263-92, GJ, N° 155, p. 67).

La restricción anterior se explica porque la participación del coadyuvante no genera -a lo menos en nuestro sistema- una hipótesis de acumulación de acciones²⁹⁰.

Lo anterior no obsta a que si las partes deciden poner término al juicio mediante un equivalente jurisdiccional, el coadyuvante se oponga, si se trata de consumar un acto fraudulento que afecte directamente sus derechos o intereses legítimos.

9. LA INTERVENCIÓN ADHESIVA LITISCONSORCIAL

9.1. Descripción de la figura

La intervención adhesiva litisconsorcial se da cuando el tercero que interviene voluntariamente en un proceso pendiente acreditada ser titular del mismo derecho que es objeto de la discusión.²⁹¹

Para entender la autonomía de esta figura lo mejor es compararla con la situación del coadyuvante, en los siguientes aspectos:

1º) El coadyuvante no es titular de la relación jurídica que es objeto del proceso; su legitimación viene dada por el hecho de ser titular de un derecho o un interés jurídico que justifica su participación, para defenderse de la eficacia directa o refleja de la sentencia que allí se pueda pronunciar. En cambio, el interviniente litisconsorcial es titular del mismo derecho que conforma la litis; como no demandó con el actor original, su ingreso al proceso lo puede realizar voluntariamente a través de esta figura, actuando como un auténtico litisconsorte que ejercita el derecho de acción que nuestro sistema no reconoce al coadyuvante.

2º) En relación a los efectos de los equivalentes jurisdiccionales, el interviniente litisconsorcial debe concurrir a su celebración con las partes que lo suscriben para poner término al juicio, atendido que es titular del mismo

²⁹⁰ La única posibilidad de que la actuación del coadyuvante genere una acumulación de acciones es si, en tiempo y forma, alcanza a promover una reconvencción contra el demandante original.

²⁹¹ Una síntesis de las distintas explicaciones sobre esta figura, DÁVILA MILLÁN, María Encarnación, *El litisconsorcio necesario*, Barcelona: Bosch, 3ª ed., 1997, pp. 35-37.

derecho que se discute en el proceso. El tercero coadyuvante, en cambio, no está obligado a participar en él, atendido que su situación jurídica está subordinada a lo que dispongan las partes originarias.

9.2. Algunas manifestaciones de la intervención adhesiva litisconsorcial

Aunque el CPC no admite esta figura en forma general, su reconocimiento se aprecia en algunas leyes especiales.

i) Una hipótesis se contiene en el art. 54 inc. 1º de la Ley Nº 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, cuando dispone que "son titulares de la acción ambiental señalada en el artículo anterior, y con el solo objeto de obtener la reparación del medio ambiente dañado, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que hayan sufrido el daño o perjuicio, las municipalidades, por los hechos acaecidos en sus respectivas comunas, y el Estado, por intermedio del Consejo de Defensa del Estado. Deducida demanda por alguno de los titulares señalados, no podrán interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como tercero. Para los efectos del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, se presume que las municipalidades y el Estado tienen interés actual en los resultados del juicio"²⁹².

En este caso, el tercero legitimado que no demandó originalmente, si decide intervenir, deberá hacerlo como un litisconsorte, ya que es titular del mismo derecho que es objeto del proceso.²⁹³

²⁹² Por su parte, el art. 18 de la Ley Nº 20.600, sobre Tribunales Ambientales, señala que: "2) En el caso del número 2), las personas naturales o jurídicas que hayan sufrido el daño o perjuicio; las municipalidades, por los hechos acaecidos en sus respectivas comunas, y el Estado, por intermedio del Consejo de Defensa del Estado. Deducida demanda por alguno de los titulares señalados no podrán interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros coadyuvantes. En el caso del inciso quinto del artículo 43 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, la acción deberá siempre ejercerla el Consejo de Defensa del Estado como parte principal".

²⁹³ A nuestro entender, al calificar esta forma de intervención como adhesiva litisconsorcial se salva la restricción que la ley ha impuesto para el ejercicio de la acción a los otros afectados por el daño medioambiental. De la misma forma, esta calificación de la intervención guarda mayor coherencia con la propuesta de la doctrina científica que postula en materia de protección del medio ambiente la existencia de un interés colectivo, que podría llevar a que varios sujetos,

La restricción anterior se explica porque la participación del coadyuvante no genera -a lo menos en nuestro sistema- una hipótesis de acumulación de acciones²⁹⁰.

Lo anterior no obsta a que si las partes deciden poner término al juicio mediante un equivalente jurisdiccional, el coadyuvante se oponga, si se trata de consumir un acto fraudulento que afecte directamente sus derechos o intereses legítimos.

9. LA INTERVENCIÓN ADHESIVA LITISCONSORCIAL

9.1. Descripción de la figura

La intervención adhesiva litisconsorcial se da cuando el tercero que interviene voluntariamente en un proceso pendiente acreditada ser titular del mismo derecho que es objeto de la discusión²⁹¹.

Para entender la autonomía de esta figura lo mejor es compararla con la situación del coadyuvante, en los siguientes aspectos:

1º) El coadyuvante no es titular de la relación jurídica que es objeto del proceso; su legitimación viene dada por el hecho de ser titular de un derecho o un interés jurídico que justifica su participación, para defenderse de la eficacia directa o refleja de la sentencia que allí se pueda pronunciar. En cambio, el interviniente litisconsorcial es titular del mismo derecho que conforma la litis; como no demandó con el actor original, su ingreso al proceso lo puede realizar voluntariamente a través de esta figura, actuando como un auténtico litisconsorte que ejercita el derecho de acción que nuestro sistema no reconoce al coadyuvante.

2º) En relación a los efectos de los equivalentes jurisdiccionales, el interviniente litisconsorcial debe concurrir a su celebración con las partes que lo suscriben para poner término al juicio, atendido que es titular del mismo

²⁹⁰ La única posibilidad de que la actuación del coadyuvante genere una acumulación de acciones es si, en tiempo y forma, alcanza a promover una reconvencción contra el demandante original.

²⁹¹ Una síntesis de las distintas explicaciones sobre esta figura, DAVILA MILLÁN, María Encarnación, *El litisconsorcio necesario*, Barcelona: Bosch, 3ª ed., 1997, pp. 35-37.

derecho que se discute en el proceso. El tercero coadyuvante, en cambio, no está obligado a participar en él, atendido que su situación jurídica está subordinada a lo que dispongan las partes originarias.

9.2. Algunas manifestaciones de la intervención adhesiva litisconsorcial

Aunque el CPC no admite esta figura en forma general, su reconocimiento se aprecia en algunas leyes especiales.

i) Una hipótesis se contiene en el art. 54 inc. 1º de la Ley N° 19.300, sobre Bases Generales del Medio Ambiente, cuando dispone que "son titulares de la acción ambiental señalada en el artículo anterior, y con el solo objeto de obtener la reparación del medio ambiente dañado, las personas naturales o jurídicas, públicas o privadas, que hayan sufrido el daño o perjuicio, las municipalidades, por los hechos acaecidos en sus respectivas comunas, y el Estado, por intermedio del Consejo de Defensa del Estado. Deducida demanda por alguno de los titulares señalados, no podrán interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como tercero. Para los efectos del artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, se presume que las municipalidades y el Estado tienen interés actual en los resultados del juicio"²⁹².

En este caso, el tercero legitimado que no demandó originalmente, si decide intervenir, deberá hacerlo como un litisconsorte, ya que es titular del mismo derecho que es objeto del proceso²⁹³.

²⁹² Por su parte, el art. 18 de la Ley N° 20.600, sobre Tribunales Ambientales, señala que: "2) En el caso del número 2), las personas naturales o jurídicas que hayan sufrido el daño o perjuicio; las municipalidades, por los hechos acaecidos en sus respectivas comunas, y el Estado, por intermedio del Consejo de Defensa del Estado. Deducida demanda por alguno de los titulares señalados no podrán interponerla los restantes, lo que no obsta a su derecho a intervenir como terceros coadyuvantes. En el caso del inciso quinto del artículo 43 de la Ley Orgánica de la Superintendencia del Medio Ambiente, la acción deberá siempre ejercerla el Consejo de Defensa del Estado como parte principal".

²⁹³ A nuestro entender, al calificar esta forma de intervención como adhesiva litisconsorcial se salva la restricción que la ley ha impuesto para el ejercicio de la acción a los otros afectados por el daño medioambiental. De la misma forma, esta calificación de la intervención guarda mayor coherencia con la propuesta de la doctrina científica que postula en materia de protección del medio ambiente la existencia de un interés colectivo, que podría llevar a que varios sujetos,

ii) Otra hipótesis de intervención adhesiva litisconsorcial se podría dar en los conflictos que surgen en materia de sociedades anónimas, cuando uno de los socios decide hacerse parte en un proceso pendiente, no habiendo entablado la acción derivativa, en un principio, junto a los demás socios (art. 133 bis. de la LSA). Como se ha explicado, la acción aludida busca reparar un daño causado a la sociedad anónima, obteniendo que la indemnización que se obtenga ingrese al patrimonio de la persona jurídica y no de los socios que demandaron. Por lo anterior, los otros socios que no demandaron podrían participar como intervinientes adhesivos, entre otros temas, para suscribir un equivalente jurisdiccional junto a los actores originales que ponga fin al juicio en términos que resulten beneficiosos al interés común que tienen en el litigio.

10. EL TERCERO PRINCIPAL O EXCLUYENTE

La intervención principal o excluyente es una figura cuya naturaleza y alcance ha suscitado un debate clásico en la doctrina.²⁹⁴

En su descripción general, se trata de una intervención voluntaria que surge cuando un tercero deduce en contra de las partes en un proceso pendiente, una acción cuya petición de protección jurídica resulta incompatible con el derecho controvertido originalmente. De esta manera, la decisión final sobre el objeto del juicio reconocerá sólo a uno de los intervinientes su titularidad.

El art. 22 del CPC dispone que, "si durante la secuela del juicio se presenta alguien reclamando sobre la cosa litigada derechos incompatibles con los de las otras partes, admitirá el tribunal sus gestiones en la forma establecida por el artículo 16 y se entenderá que acepta todo lo obrado antes de su presentación, continuando el juicio en el estado en que se encuentre".

por ser portadores del mismo interés quieran participar en un único proceso para la reparación medioambiental. (Sobre la forma de protección en este ámbito, BORDALI SALAMANCA, Andrés, *Tutela Jurisdiccional del Medio Ambiente*, Santiago: Fallos del Mes, 2004, pp. 138-325).

²⁹⁴ Una síntesis histórica de esta figura cfr. FAIRÉN GUILLÉN, Víctor, "Notas sobre la intervención principal en el proceso civil", en *Estudios de Derecho Procesal*, Madrid: Revista de Derecho Privado, 1955, pp. 173-219.

El ejemplo clásico de esta figura se da cuando Ticio y Cayo se disputan la propiedad de una cosa, y aparece en ese proceso Decio alegando que él es el dueño de la especie.

A diferencia de lo que ocurre con el coadyuvante, el interviniente principal deduce una nueva acción, dando lugar a una ampliación sobrevenida del objeto del proceso (una acumulación de acciones).

Nuestra legislación no clarifica la oportunidad en que ha de realizarse esta intervención. Ahora, considerando que nuestro sistema de apelación no admite la introducción de nuevas acciones, sino que se limita a una revisión de lo resuelto en el primer grado, no sería procedente esta forma de intervención en la segunda instancia²⁹⁵. Para que así fuera tendría que existir una norma que permita hacer una excepción al principio de la doble instancia. Por lo anterior, se puede concluir que el tercero principal o excluyente sólo puede ingresar en un proceso en primera o única instancia, mientras exista litispendencia.

Naturalmente que el juez que conoce de esta intervención debe tener competencia absoluta y relativa para pronunciarse sobre el fondo de la nueva acción deducida.

Ahora, la mayor omisión en la regulación de esta figura dice relación con la manera como se tramita esta intervención. El CPC da por supuesta la unidad procedimental, esto es, supone que la acción se deduce en el mismo

²⁹⁵ En el campo teórico, la apelación puede tener una diversa fisonomía, existiendo básicamente dos regímenes: el de apelación plena o completa (*ius novorum*), y el de apelación limitada. La diferencia entre ambos radica en la posibilidad de innovar que le es reconocida al tribunal de segunda instancia, especialmente en los siguientes aspectos: el ejercicio de nuevas pretensiones en la apelación, la aportación de pruebas, las facultades del tribunal de alzada al conocer del recurso, entre otros aspectos. Nuestro proceso civil se ajusta al modelo de apelación limitada, puesto que no admite la introducción de nuevas cuestiones controvertidas, de modo que la segunda instancia es una revisión de la primera. Sólo en casos excepcionales, el tribunal de alzada podría pronunciarse, por primera vez, sobre algún elemento del objeto del proceso (acciones o excepciones) que no haya sido fallado en primera instancia, tal como ocurre con las acciones y excepciones que no fueron falladas, por ser incompatibles con las aceptadas en el fallo apelado (art. 170 N° 6 CPC; art. 208 CPC); en la apelación deducida en un juicio sumario (art. 692 del CPC), y en los casos que la ley permita al tribunal de alzada hacer declaraciones de oficio (art. 209 CPC).

procedimiento iniciado por las partes, y por ende, la forma de tramitación será la de un incidente ordinario, con el riesgo de hacer surgir en dicho debate accesorio un verdadero “juicio dentro del juicio”.

Seguramente, la falta de claridad en una cuestión tan esencial como la recién indicada, ha llevado a que, en nuestra práctica forense, esta figura prácticamente no sea utilizada.

Desde otro punto de vista, el tercero que es titular de derechos incompatibles al de las partes le resulta más ventajoso iniciar un juicio separado, y luego acumularlo al ya iniciado, conforme a lo dispuesto en el art. 92 N°s. 1 y 3 CPC. De esa forma se evita la restricción que suponer ingresar a una relación procesal ya comenzada.

11. LA INTERVENCIÓN DEL TERCERO INDEPENDIENTE

Dentro de la regulación de la intervención voluntaria, la figura del tercero independiente es la más difícil de delimitar. Conforme al art. 23 del CPC, “si el interés invocado por el tercero es independiente del que corresponde en el juicio a las dos partes”, se permitirá su ingreso al proceso.

Como se puede apreciar, la legitimación que justifica su participación es completamente distinta a la construcción dogmática que explica el ingreso a la relación procesal del tercero coadyuvante, del tercero principal o del interviniente litisconsorcial. Como este sujeto no tendría ninguna relación con el objeto del proceso, la posibilidad que pueda intervenir aparece como lejana.

Sin embargo, en la jurisprudencia se han dado casos donde se ha permitido esta forma de intervención, reconociendo al tercero el derecho a impugnar un determinado acto procesal, cuyos efectos le causaban un perjuicio, pero sin que le interesara a este interviniente el resultado final del juicio seguido entre las partes.

Un ejemplo de lo anterior ha surgido en relación a la constitución judicial de un usufructo sobre un bien que ya estaba hipotecado. Así, se ha admitido que el acreedor hipotecario intervenga en el juicio donde se constituye el usufructo, solicitando al juez que lo declare inoponible; aunque el acreedor hipotecario no es parte en ese juicio, es evidente que la resolución judicial

que ha dado vida al usufructo le afecta directamente en el contenido de su derecho real, ocasionándole un perjuicio jurídico. Como se puede apreciar, el tercero que comparece tiene un interés legítimo e independiente del que corresponde en el juicio a las partes, acotando su intervención a una petición de declaración negativa, que haga cesar el gravamen sobrevenido a la constitución de la hipoteca²⁹⁶.

En igual sentido, se ha admitido la intervención de un tercero independiente para impugnar un determinado acto que fue adoptado en un juicio pendiente donde no tenía la calidad de parte, pero que le causaba perjuicio patrimonial²⁹⁷.

²⁹⁶ Un estudio del tema, CUNEO MACCHIARELLO, Andrés, “El usufructo constituido con posterioridad a una hipoteca: su eficacia frente al acreedor hipotecario”, LOPEZ SANTA MARIA, Jorge, “Acción de desposeimiento en contra del usufructuario del inmueble hipotecado, intentada por el acreedor adjudicatario de la nuda propiedad”, ambos en *Doctrinas Esenciales. Derecho Civil. Bienes*, Santiago: Editorial Jurídica de Chile, VV.AA., Director R. Tavalani, 2010, pp. 663-679 y 681-691.

²⁹⁷ En este sentido, C. de Ap. de Valparaíso, 13 de mayo de 1998 (LegalPublishing: 19729), donde se resolvió: “1° Que la situación de la tercerista que interviene en el juicio ejecutivo con el propósito de obtener la nulidad del procedimiento de apremio que le perjudica, al no haber podido proseguir con su propia ejecución basada en un crédito valista y resguardado por una medida precautoria de prohibición de celebrar actos y contratos respecto de un vehículo embargado e incluso incautado, se halla contemplada en el artículo 23, inciso final, del Estatuto de Instrucción Civil, que es el precepto invocado por aquella y, por consiguiente, cabe admitir su pretensión, por cuanto el interés invocado es independiente del que corresponde a los litigantes principales. 2° Que las solicitudes de estos terceros que esgrimen derechos independientes con los de aquellos que discuten las partes directas, deben someterse a los trámites establecidos para las peticiones de índole similar que pueden formalizar estos contendientes. 3° Que los autores asignan a las tercerías un carácter común a todos los procedimientos, esto es, tienen aplicación tanto en los juicios ordinarios como en los especiales, no obstante que la ley se limitó a regular particularmente esta institución dentro del juicio ejecutivo, para lo cual basta observar su ubicación en el Libro I del Código, destinado precisamente a las reglas comunes a todo procedimiento. Por lo demás la actuación adhesiva sólo importa una cuestión accesorio del pleito y no representa entonces uno nuevo, de suerte que su ritualidad es común también para las partes y los terceros y éstos tienen unos mismos derechos procesales que hacer valer en apoyo de sus respectivas pretensiones (Anabalin: Tratado Práctico de Derecho Procesal Civil Chileno, tomo II, volumen 1° disposiciones comunes a todo procedimiento, segunda edición aumentada, corregida y renovada, Librotec Ltda., editores, Santiago de Chile, año 1966, N° 992, página 169). 4° Que, a mayor abundamiento y en forma excepcional pueden concurrir terceros en el procedimiento ejecutivo que aleguen derechos diversos de los establecidos en el artículo 518 del Estatuto de Enjuiciamiento Civil, siempre que del conjunto de normas que gobiernan la ejecución aparezca

Como se puede apreciar, la figura del tercero independiente ha servido de instrumento para proteger a ciertos terceros de los efectos de determinadas resoluciones judiciales, pronunciadas en procesos donde el objeto de la discusión le es indiferente. El tercero independiente lo único que busca es obtener una declaración negativa, para hacer cesar los efectos de una resolución judicial que incide en sus derechos o intereses legítimos.

12. LA INTERVENCIÓN FORZADA

La intervención forzada, provocada o coactiva, es una figura que está lejos de una descripción uniforme, tanto en la doctrina como en derecho comparado²⁹⁸. Su existencia se vincula normalmente a ciertas obligaciones

evidente la facultad del tercerista para intervenir (Rodríguez Garcés: *Tratado de las Tercerías Intervención de terceros en juicio*, tomo I, segunda edición, Librotec Ltda., editores, Santiago de Chile, año 1967, N° 18, página 189), cuyo es el caso planteado en autos. Por estas consideraciones y lo dispuesto en los artículos 186 y 227 del Código de Procedimiento Civil, se revoca la resolución apelada de 13 de agosto recién pasado, escrita a fojas 18 de estas compulsas y, en cambio, se declara que se tiene como tercero independiente a la compareciente (...), por lo que, deberá resolverse el incidente de nulidad promovido en el primer otrosí de esa presentación".

²⁹⁸ El CPC francés contiene un estatuto especial para la denominada "llamada en garantía" (arts. 331 a 338). Como principio rector, el art. 331 establece que, "podrá llamarse a un tercero al proceso, a los efectos de que pueda resultar condenado, por aquella parte que disponga frente a él de acción a título principal". "Podrá ser igualmente llamado al proceso por aquella parte que ostente un interés en que la sentencia también despliegue sus efectos frente a él". El art. 332 dispone que "el tribunal podrá requerir a las partes para que llamen al proceso a todos aquellos interesados cuya presencia le parezca necesaria para poder resolver el litigio". El Código de Procedimiento Civil italiano ha contemplado la intervención forzada a petición de parte o por orden del juez (arts. 106 y 107). También contempla la extromisión del llamado en garantía (arts. 108 y 109). La Ley de Enjuiciamiento Civil española, de 2001, dentro de la "pluralidad de partes", distingue entre intervención voluntaria y provocada. Para esta última, el artículo 14 señala: "1. En caso de que la ley permita que el demandante llame a un tercero para que intervenga en el proceso sin la cualidad de demandado, la solicitud de intervención deberá realizarse en la demanda, salvo que la ley disponga expresamente otra cosa. Admitida por el tribunal la entrada en el proceso del tercero, esté dispondrá de las mismas facultades de actuación que la ley concede a las partes" (...). El Código General del Proceso de Uruguay, de 1988, regula este tema contemplando la "intervención necesaria por citación", en virtud de la cual "el demandado, en el plazo para contestar y sin perjuicio de hacerlo, podrá solicitar el emplazamiento de un tercero en garantía o de aquél respecto al cual considera que la controversia es común o a quien la sentencia pueda afectar. El emplazado no podrá objetar la procedencia de su emplazamiento y deberá comparecer, tendrá los mismos derechos, deberes y cargas del demandado" (art. 51). La ZPO reconoce la citación de terceros en situaciones vinculadas al derecho de dominio. (Cfr. PÉREZ RAGONE, Alvaro - Ortiz

de garantía que se imponen a determinados terceros, los que se pueden ver obligados a ingresar a un proceso pendiente con el objeto de satisfacer un determinado interés previsto por el legislador.

El carácter coactivo de esta intervención viene dado por el hecho que el tercero es compelido a participar en un proceso pendiente, bajo la amenaza de producirse en su contra algún efecto jurídico desfavorable, si no comparece.

El Código de Procedimiento Civil no contempla una regla general para forzar la intervención de un tercero. La única norma cercana a esta institución la contiene el art. 21 del CPC, cuando dispone que si la acción ejercida por alguna persona corresponde también a otra u otras personas determinadas, podrán los demandados pedir que se ponga la demanda en conocimiento de las que no hayan concurrido a entablarla, quienes deberán expresar en el término de emplazamiento si se adhieren a ella²⁹⁹.

Como hipótesis de intervención provocada, el precepto anterior es altamente deficiente, atendido que no clarifica en qué consiste la adhesión a la demanda. Concretamente, no se explicita si el tercero citado concurre al proceso ampliando subjetivamente la relación procesal o, por el contrario, si al comparecer puede formular su propia acción.

Si entendemos que el tercero queda limitado por el contenido de la demanda a la que adhiere, con ello se infringiría el contenido del derecho de acción, ya que, hasta antes de la citación, el tercero podía accionar sin restricción. De igual forma, esta solución vulnera el contenido básico del principio dispositivo, al imponer a una persona la obligación de adherirse a una demanda propuesta por otros.

PRADILLO, Juan Carlos, *Código Procesal Civil Alemán (ZPO)*, Konrad Adenauer Stiftung, 2006, pp. 168-169).

²⁹⁹ Este precepto tiene su origen en el Proyecto de Vargas Fontecilla; la razón que llevó a incluir esta figura fue el deseo de regular una práctica forense anterior a la codificación que había generado abusos sobre la comparecencia de terceros al juicio. Mayores antecedentes en, CIO BOTETANO, Carlos, *El artículo 21 del Código de Procedimiento Civil*, Memoria de Prueba, Universidad de los Andes, 2001.

La Corte Suprema, en varias sentencias ha declarado sobre esta figura que "no se puede ampliar el objeto del proceso mediante un adherimiento hecho en un proceso a nombre de una nueva demandante, toda vez que ese adherimiento es una acción diversa de la anterior que debería cumplir con todas las exigencias de toda primera demanda"³⁰⁰.

En nuestra opinión, la aplicación de este precepto debería encauzar a los terceros que puedan intervenir en la forma adhesiva litisconsorcial. En efecto, como ellos pueden reclamar *el mismo derecho* que forma parte del objeto del proceso, a través de esta citación se facilitaría que puedan asumir alguna de las actitudes que admite la ley, en una discusión pendiente donde tienen derechos comprometidos, como puede ocurrir, por ejemplo, en un proceso tendiente a reparar un daño medioambiental.

13. LA DENUNCIA DEL LITIGIO

La denuncia del litigio (o *litisdenuciación*) es un acto de comunicación que busca poner en conocimiento de un tercero la existencia de un juicio pendiente, cuyo resultado le puede acarrear alguna consecuencia desfavorable³⁰¹.

Con este acto procesal se puede lograr que el tercero denunciado asuma una determinada actitud. Ella dependerá naturalmente de la situación en la

³⁰⁰ CS, 11 de marzo de 1904, RDI, t. I, 2ª parte, p. 251. En igual sentido, C. de Ap. de Santiago, 11 de julio de 1947, RDI, t. XLV, sec. 2ª, p. 24. También en la jurisprudencia se ha resuelto que "la manifestación del tercero de su voluntad de no adherirse al juicio a que ha sido convocado, produce ipso iure la pérdida de la acción, cualquiera que sean las resultas posteriores del juicio: la sentencia que en él recaiga producirá cosa juzgada a su respecto aun cuando no le sea notificada" (C. de Ap. de Santiago, 11 de julio de 1947, RDI, t., XLV, sec. 2ª, p. 24).

³⁰¹ En algunos ordenamientos la denuncia del litigio está contemplada de un modo general, y puede activarse a petición de parte o, incluso, de oficio por el juez de la causa, dejando al tercero definir si interviene o no en el proceso pendiente. Por ejemplo, el CGP de Uruguay contempla una norma de litisdenuciación en los siguientes términos: "Denuncia de terceros. El demandado, en un proceso en el que considere que otra persona, además o en lugar de él, tiene alguna obligación o responsabilidad en la cuestión controvertida, debe denunciarlo, indicando su nombre y domicilio, a los efectos de que se le noticie del pleito, bajo responsabilidad de los daños y perjuicios que correspondieren por su omisión" (art. 53). Similar solución contempla la Ordenanza Procesal Civil alemana en sus parágrafos 72 y ss.

que se encuentre respecto del objeto del proceso. Así, por ejemplo, podría verse motivado a solicitar intervenir voluntariamente como coadyuvante, pero también podría generar alguna hipótesis de intervención provocada, como ocurre en nuestro derecho civil con la citación de evicción (arts. 1843 y 1844 CC).

Actualmente cuenta con un reconocimiento parcial, tal como se aprecia en los siguientes preceptos, que citamos a modo de ejemplo:

- a) El artículo 11 de la Ley N° 18.101, sobre Arrendamientos Urbanos, dispone que, para hacer oponible a los subarrendatarios lo obrado y la sentencia recaída en los juicios de desahucio, de restitución o de terminación del arrendamiento por falta de pago de la renta, seguidos contra el arrendatario, les deberá ser notificada la demanda³⁰².

En este caso, el acto de comunicación permite que los efectos de la sentencia alcance a esos terceros, los que, por tener la calidad de subarrendatarios, verán extinguidos sus derechos si su arrendador pierde el juicio. Asimismo, esta denuncia les permite a los subarrendatarios poder intervenir voluntariamente como coadyuvantes de su subarrendador.

- b) En el procedimiento ante los Juzgados de Policía Local, para que la sentencia condenatoria pueda surtir efecto respecto del tercero civilmente responsable, la ley exige poner en conocimiento de éste la denuncia o querella seguida ante ese tribunal, mediante una notificación judicial, practicada antes de la dictación de la sentencia (art. 29 inc. 2º de la Ley N° 18.287). En este caso, la litisdenuciación constituye un trámite que permite, en un proceso posterior, invocar en contra de ese tercero los efectos de la sentencia judicial, aunque no haya sido parte³⁰³. Si tal comunicación no se practica, el tercero podrá hacer valer, en su

³⁰² C. de Ap. de Concepción, 6 de mayo de 1996, RDI, t. XCIII, sec. 2ª, p. 49.

³⁰³ En este sentido, CS, 4 de octubre de 1972, RDI, t. LXIX, sec. 1ª, p. 161. Practicada que sea la litis denunciaci3n en el juicio posterior, el tercero civilmente responsable no podr3 poner en duda la existencia del hecho que constituye el delito o la infracci3n, ni la responsabilidad del condenado, conforme a lo que dispone el art. 178 del CPC, que reconoce eficacia a la sentencia condenatoria penal en los juicios civiles. (En este sentido, cfr. C. de Ap. de Concepci3n, 23 de mayo de 1990, RDI, t. LXXXVII, sec. 2ª, p. 104).